



# Asamblea General

Distr. general  
11 de marzo de 2021  
Español  
Original: inglés

## Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

### Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 89º período de sesiones, 23 a 27 de noviembre de 2020

#### Opinión núm. 91/2020, relativa a Safoora Zargar (India)

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.

2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 22 de julio de 2020 al Gobierno de la India una comunicación relativa a Safoora Zargar. El Gobierno no ha respondido a la comunicación. El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).



## Información recibida

### *Comunicación de la fuente*

4. Safoora Zargar es una nacional de la India que tenía 27 años de edad en el momento de su detención. Es estudiante de la Jamia Millia Islamia (Universidad Islámica Nacional) de Nueva Delhi. También actúa como persona de enlace para el Comité de Coordinación de la Jamia, un grupo estudiantil que intervino en la organización de protestas pacíficas contra la Ley de Modificación de la Ley de Ciudadanía, de 2019. La Sra. Zargar reside en Nueva Delhi.

5. La fuente comunica que la Sra. Zargar fue detenida en su domicilio de Nueva Delhi el 10 de abril de 2020, alrededor de las 15.30 horas. Entre 10 y 12 hombres y 1 mujer, ninguno de los cuales iba uniformado, se llevaron a la Sra. Zargar de su casa. No se mostró ninguna orden de detención escrita.

6. Se indica que posteriormente se comunicó a la Sra. Zargar que había sido detenida en relación con el atestado preliminar de investigación policial núm. 59/2020, registrado el 6 de marzo de 2020 por la comisaría de la Dependencia Especial de la Policía de la colonia Lodhi. Fue trasladada a la comisaría de la Dependencia Especial de la Policía y estuvo presa allí. Sin embargo, a las 22.30 horas quedó detenida en la comisaría de la Dependencia Especial de la Policía en virtud del atestado preliminar de investigación policial núm. 48/2020, emitido el 24 de febrero de 2020, por la comisaría de policía de Jaffrabad, en la zona nordeste de Delhi. Las acusaciones que figuran en ese documento no requerían prisión preventiva, ya que conllevan la posibilidad de libertad bajo fianza y que la pena máxima aplicable a los presuntos delitos es inferior a siete años de prisión. Permaneció presa toda la noche en la comisaría de la Dependencia Especial de la Policía. La fuente especifica que el nombre de la Sra. Zargar no figuraba en ninguno de los atestados mencionados.

7. La fuente especifica asimismo que la legislación aplicada al caso incluye el Código Penal de la India y la Ley de Prevención de Daños a los Bienes Públicos, así como la Ley de Armas y la Ley de Prevención de las Actividades Ilícitas. Más precisamente, en el atestado preliminar de investigación policial núm. 48/2020 de la comisaría de policía de Jaffrabad se citan delitos contemplados en los siguientes artículos del Código Penal de la India: 188 (desobediencia de una orden debidamente promulgada por un funcionario público), 353 (agresión o uso de la fuerza constitutivo de delito para impedir a un funcionario público el cumplimiento de su deber), 283 (causar un peligro o una obstrucción en una vía pública o ruta de navegación), 341 (penas aplicables a la retención ilícita), 109 (penas aplicables por complicidad en la comisión de un delito si el acto ha sido cometido como consecuencia de ello y cuando no exista una disposición explícita para su sanción) y 147 (penas aplicables a los disturbios) leído conjuntamente con el artículo 34 (actos cometidos por varias personas para promover una intención común).

8. El 13 de abril de 2020, el Juzgado Metropolitano de Primera Instancia, del Tribunal de Distrito de Karkardooma, concedió la libertad bajo fianza a la Sra. Zargar en relación con el atestado preliminar de investigación policial núm. 48/2020, observando que a causa de su embarazo necesitaba una atención médica apropiada y que la mayoría de los delitos que se le imputaban conllevaban la posibilidad de la libertad bajo fianza. El tribunal también se remitió a la decisión del Tribunal Supremo de la India (Demanda (civil) núm. 1 de 2020) relativa a la descongestión de las prisiones a causa de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19).

9. El 13 de abril de 2020, después de que se ordenara su puesta en libertad en relación con el atestado preliminar de investigación policial núm. 48/2020, la Sra. Zargar volvió a ser detenida inmediatamente en virtud del atestado preliminar de investigación policial núm. 59/2020. En dicho atestado se citan los siguientes artículos del Código Penal de la India: 147 (penas aplicables a los disturbios), 148 (disturbios con un arma letal), 149 (todos los participantes en una asociación ilícita son culpables de un delito cometido para promover un objetivo común) y 120B (penas aplicables a la asociación para delinquir).

10. Asimismo, en ese atestado se mencionan otros 18 delitos tipificados en los siguientes artículos del Código Penal de la India: 302 (penas aplicables al homicidio), 307 (tentativa de homicidio), 124A (sedición), 153A (fomento de la enemistad entre grupos diferentes por motivos de religión, raza, lugar de nacimiento, residencia, idioma, etc., y comisión de actos

perjudiciales para el mantenimiento de la armonía), 186 (obstrucción del desempeño de las funciones de un funcionario público), 53 (penas), 395 (bandas (*dacoit*)), 427 (vandalismo que cause daños por un total de 50 rupias), 435 y 436 (vandalismo en que intervenga el fuego o una sustancia explosiva), 452 y 454 (allanamiento de morada), y 109 y 114 (penas aplicables a la complicidad en la comisión de un delito).

11. También se añadieron más adelante, en una fecha desconocida, los artículos 3 y 427 (vandalismo que cause daños a la propiedad pública) de la Ley de Prevención de Daños a los Bienes Públicos, y los artículos 25 y 27 de la Ley de Armas. El 21 de abril de 2020 se añadieron los artículos 13, 16, 17 y 18 de la Ley de Prevención de las Actividades Ilícitas (penas aplicables a actividades ilícitas, penas aplicables a actos terroristas, penas aplicables a la recaudación de fondos para actos terroristas y penas aplicables a la asociación para delinquir).

12. La fuente sostiene que esto se hizo para que resultara aún más difícil obtener la libertad bajo fianza y para obstaculizar cualquier argumento basado en la mala salud de la Sra. Zargar. Las adiciones se produjeron después de que el juez del Juzgado Metropolitano de Primera Instancia observara el 20 de abril de 2020 que las acusaciones contra la Sra. Zargar eran poco claras y que la respuesta de la policía fue “críptica y superficial”.

13. El 24 de abril de 2020, el Tribunal de Patiala de Nueva Delhi rechazó una petición de libertad bajo fianza de la Sra. Zargar argumentando que las acusaciones formuladas contra ella revestían mucha gravedad y que solo podía ser juzgada por un tribunal superior de lo penal (*sessions court*). La fuente también señala que una de las personas acusadas que constaban en el primer atestado preliminar de investigación policial núm. 59/2020 fue puesta en libertad bajo fianza el 13 de marzo de 2020, seis días después de ser detenida y después de haber permanecido bajo custodia policial.

14. Posteriormente, el 2 de mayo de 2020, el abogado de la Sra. Zargar retiró la petición de libertad bajo fianza a causa de la actitud hostil del juez de guardia, con objeto de impedir que el rechazo de la petición afectara negativamente un ulterior recurso en tribunales superiores.

15. El 4 de junio de 2020, el Juzgado de Primera Instancia del Tribunal de Patiala, en Nueva Delhi, rechazó otra petición de libertad bajo fianza presentada por la Sra. Zargar. Se señala que el juez de apelación consideró infundada la petición de libertad bajo fianza.

16. El 17 de junio de 2020, el abogado de la Sra. Zargar presentó ante el Tribunal Superior de Delhi un recurso contra la decisión del Juzgado de Primera Instancia por la que se denegaba la petición de libertad bajo fianza. El 22 de junio de 2020, el Tribunal Superior de Delhi aplazó una cuarta vista sobre la libertad bajo fianza para la Sra. Zargar. Se indica que, en su informe, la policía se opuso a la libertad bajo fianza de la Sra. Zargar declarando que esta formaba parte de la “asociación para delinquir, no solo para causar desafección sino también para utilizar todos los medios posibles para causar la muerte, lesiones y pérdidas a personas”. En el informe se afirma que el objetivo principal era derrocar el Gobierno por medios violentos instigando disturbios y malestar en todo el país. Uno de los motivos determinantes citados por la policía de Delhi para mantener detenida a la Sra. Zargar era que ella era presuntamente uno de los principales conspiradores y de los principales instigadores de los disturbios. La policía declaró asimismo que el embarazo no era motivo para concederle la libertad bajo fianza, y que en los últimos diez años había habido 39 nacimientos en las prisiones de Delhi.

17. El 23 de junio de 2020, el Tribunal Superior de Delhi concedió a la Sra. Zargar la libertad bajo fianza por motivos humanitarios. En consecuencia, fue puesta en libertad bajo fianza el 24 de junio de 2020. Los abogados de la policía de Delhi declararon que no tenían objeción a la libertad bajo fianza de la Sra. Zargar por motivos humanitarios. El juez concedió la libertad a la Sra. Zargar bajo una fianza de 10.000 rupias a condición de que no se dedicara a actividades que contravinieran la ley u obstruyeran la investigación. Además, debe obtener el permiso del tribunal antes de salir de Delhi y debe ponerse en contacto por teléfono cada 15 días con el funcionario encargado de la investigación.

18. La fuente recapitula indicando que la Sra. Zargar estuvo detenida el 10 de abril de 2020 en la comisaría de la Dependencia Especial de la Policía, del 11 al 14 de abril de 2020

en la comisaría de policía de Jaffrabad, del 14 al 15 de abril de 2020 en la comisaría de la Dependencia Especial de la Policía, y desde el 15 de abril de 2020 en la prisión núm. 6 de Tihar, en Delhi. La custodia policial fue ordenada en dos ocasiones por el juez de guardia del Juzgado Metropolitano de Primera Instancia del Tribunal de Patiala y la detención judicial en una ocasión por el juez penitenciario de la prisión de Tihar.

19. La fuente sostiene que se ha implicado falsamente a la Sra. Zargar en la incitación a la violencia que se produjo en Delhi entre el 23 y el 26 de febrero de 2020, en la presunta participación en actividades terroristas y por hacer proclamas en las protestas pacíficas contra la recién promulgada Ley de Modificación de la Ley de Ciudadanía.

20. La fuente explica que la Ley de Modificación de la Ley de Ciudadanía otorga la ciudadanía a los hindúes, sijs, budistas, jainistas, parsis y cristianos del Afganistán, de Bangladesh y del Pakistán que hayan llegado a la India antes del 31 de diciembre de 2014 si han vivido en la India durante seis años. La fuente afirma que la Ley vulnera el artículo 14 de la Constitución de la India, que garantiza el derecho a la igualdad. Según indica la fuente, esto también entraña que las personas que profesan religiones distintas de las seis citadas, incluidos los musulmanes y los ateos, no tendrán derecho a reclamar la ciudadanía con arreglo a las condiciones de la Ley de Modificación de la Ley de Ciudadanía.

21. La fuente añade que en el atestado preliminar de investigación policial en virtud del cual fue detenida la Sra. Zargar, esta no consta como imputada, como tampoco figuran acusaciones concretas contra ella aparte de la de hacer proclamas supuestamente incendiarias.

22. La fuente afirma que la detención de la Sra. Zargar se inscribe en la categoría I del Grupo de Trabajo. Alega que no hay ningún fundamento jurídico para la detención de la Sra. Zargar, ya que la policía la detuvo de manera irregular y la obligó a firmar hojas de papel en blanco mientras se encontraba en la comisaría de la Dependencia Especial de la Policía. Fue detenida bajo acusación de cometer un delito con respecto al cual no se la cita, y el demandante en el caso es la propia policía. Se indica que la información en que se basó la policía para abrir el atestado preliminar proviene de informadores secretos. Más adelante fue detenida en relación con otro atestado preliminar abierto en otra comisaría de policía, lo cual presuntamente pone de manifiesto un mal uso de la ley por la policía a fin de inculparla.

23. Además, la fuente alega que, habida cuenta del estado de salud de la Sra. Zargar, no había necesidad de detenerla con urgencia, por muy graves que fueran las acusaciones. Tan pronto como se le concedió la libertad bajo fianza en relación con el atestado preliminar de investigación policial núm. 48/2020, volvió a ser detenida en virtud del atestado preliminar de investigación policial núm. 59/2020. La fuente afirma que ello demuestra la intención de las autoridades de mantenerla presa más tiempo.

24. Asimismo, la fuente afirma que los delitos correspondientes a la Ley de Prevención de Daños a los Bienes Públicos, la Ley de Armas y la Ley de Prevención de las Actividades Ilícitas se agregaron después de su detención, al igual que su libertad bajo fianza en relación con el primer atestado preliminar de investigación policial, y después de que el juez de guardia del juzgado metropolitano de primera instancia del Tribunal de Patiala expresara dudas acerca de las versiones aportadas por la policía sobre las nuevas acusaciones contra ella. La fuente añade que la Ley de Prevención de las Actividades Ilícitas —que es la principal legislación de lucha contra el terrorismo en la India— permite que la policía mantenga detenidos indefinidamente a los sospechosos antes de haber sido declarados culpables, aplicando disposiciones vagas y excesivamente generales. Por consiguiente, es imposible invocar un fundamento jurídico que justifique la privación de libertad. La fuente recuerda también que existe un cuadro general de detenciones de activistas en virtud de las disposiciones de la Ley de Prevención de las Actividades Ilícitas, lo cual limita el recurso a la justicia de esas personas.

25. Por último, la fuente afirma que en la vista sobre la libertad bajo fianza celebrada ante el tribunal superior de lo penal el 2 de mayo de 2020, el abogado de la Sra. Zargar retiró la petición de libertad bajo fianza, por considerar que el juez de guardia tenía una actitud hostil, y con objeto de impedir que la petición tuviera un efecto negativo en un ulterior recurso en tribunales superiores. En la orden de rechazo de la libertad bajo fianza no se menciona ningún motivo más que la retirada de la petición por el asesor letrado.

26. Según la fuente, el confinamiento debido a la COVID-19 ha empeorado la situación de la Sra. Zargar, que ya era difícil, porque las vistas no se celebraban en tribunales sino en el complejo penitenciario, lo cual dificultaba la comparecencia de los abogados. El 30 de abril de 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dictó instrucciones a las autoridades de la prisión de Tihar para que en un plazo de cuatro semanas dieran una respuesta en relación con las condiciones de reclusión de Sra. Zargar, teniendo en cuenta que estaba embarazada, que se le había denegado atención médica y una dieta especial, que no se le había permitido reunirse ni comunicarse con su familia o con sus abogados y que había permanecido incomunicada desde el 10 de abril de 2020.

27. La fuente argumenta asimismo que la privación de libertad de la Sra. Zargar es consecuencia del ejercicio de derechos humanos reconocidos universalmente, en particular el derecho a las libertades de opinión, expresión y reunión pacífica. Habida cuenta de que la Sra. Zargar tenía una actitud crítica sobre la promulgación de la Ley de Modificación de la Ley de Ciudadanía, por el hecho de ser una defensora de los derechos humanos participante en protestas públicas contra la Ley de Modificación de la Ley de Ciudadanía, y como persona de enlace con los medios de comunicación para el Comité de Coordinación de la Jamia, su detención puede interpretarse como un intento de reprimir su disidencia intimidándola a ella y a otras personas asociadas con el Comité de Coordinación de la Jamia.

28. La fuente afirma que las libertades de opinión y de expresión y de reunión pacífica son derechos humanos fundamentales consagrados en los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 19 y 21 del Pacto<sup>1</sup>, en el cual la India es Estado parte, y el artículo 19 de la Constitución de la India.

29. Según la fuente, el Gobierno debe respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a tener y expresar opiniones, incluidas las que no estén en consonancia con su política oficial, así como el derecho a pensar y manifestar convicciones personales contrarias a su ideología oficial, con arreglo a las normas imperativas (*ius cogens*) del derecho internacional consuetudinario<sup>2</sup>. El Comité de Derechos Humanos, en su observación general núm. 34 (2011), indicó que las restricciones a la libertad de expresión no debían ser excesivamente amplias y debían ajustarse al principio de proporcionalidad, debían ser adecuadas para desempeñar su función protectora, debían ser el instrumento menos perturbador de los que permitieran conseguir el resultado deseado, y debían guardar proporción con el interés que debía protegerse.

30. La fuente especifica que el Pacto atribuye una gran importancia a la expresión sin inhibiciones en el debate público sobre figuras del ámbito público y político en una sociedad democrática. Asimismo, la fuente declara que la aplicación de disposiciones vagas y excesivamente amplias añade peso a la conclusión de que la privación de libertad de la Sra. Zargar se inscribe en la categoría II<sup>3</sup>.

31. Por otra parte, se alega que, dado que la privación de libertad de la Sra. Zargar ha sido consecuencia de la vulneración activa de los derechos civiles y políticos, hay una fundada presunción de que la privación de libertad también constituye una vulneración del derecho internacional en razón de una discriminación basada en opiniones políticas o de otra índole<sup>4</sup>.

32. La fuente prosigue afirmando que, en particular, la Sra. Zargar es víctima de discriminación por realizar actividades de defensa de los derechos humanos, lo cual contraviene su derecho a la igualdad ante la ley y a igual protección de la ley, consagrado en el artículo 26 del Pacto<sup>5</sup>. La fuente afirma que las opiniones políticas de la Sra. Zargar y sus convicciones con respecto a las políticas y medidas del Gobierno son un factor decisivo en el presente caso.

33. La fuente sostiene que la detención de la Sra. Zargar fue arbitraria y se inscribe en las categorías I, II y V.

<sup>1</sup> *Yong-Joo Kang c. la República de Corea* (CCPR/C/78/D/878/1999), párr. 7.2.

<sup>2</sup> Opinión núm. 13/2018, párr. 23.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Opiniones núm. 88/2017, párr. 43; y núm. 13/2018, párr. 34.

<sup>5</sup> Opinión núm. 45/2016.

## Análisis de las vulneraciones cometidas

## i. Categoría I

34. La privación de libertad de la Sra. Zargar carece de fundamento jurídico, dado que la policía la detuvo de manera irregular y la obligó a firmar hojas de papel en blanco cuando estaba en la comisaría de la Dependencia Especial de la Policía. Fue detenida por un presunto delito del cual no se la acusa, y el demandante en el caso es la policía. Se señala que la información en que se basó la policía para abrir el atestado preliminar provenía de informadores secretos. Más adelante fue detenida en virtud de otro atestado preliminar abierto en una comisaría de policía diferente, lo cual presuntamente indica un mal uso de la ley por la policía para inculparla.

35. Por otra parte, teniendo en cuenta su estado de salud, no había necesidad de proceder a una detención urgente de la activista estudiantil, por muy graves que fueran las acusaciones. Tan pronto como se le concedió la libertad bajo fianza en relación con el atestado preliminar de investigación policial núm. 48/2020, volvió a ser detenida en virtud del atestado preliminar de investigación policial núm. 59/2020. Ello demuestra claramente mala fe en las intenciones de las autoridades y la policía de Delhi para mantenerla presa más tiempo. Además, los delitos correspondientes a la Ley de Prevención de Daños a los Bienes Públicos, la Ley de Armas y la Ley de Prevención de las Actividades Ilícitas no se agregaron hasta después de su detención, al igual que su libertad bajo fianza en relación con el primer atestado preliminar, y después de que el juez de guardia del juzgado metropolitano de primera instancia del Tribunal de Patiala expresara dudas acerca de las versiones de la policía respecto de los nuevos cargos contra ella. La principal ley de lucha contra el terrorismo de la India —la Ley de Prevención de las Actividades Ilícitas— permite a la policía mantener detenidos indefinidamente a los sospechosos antes de haber sido declarados culpables, aplicando disposiciones vagas y excesivamente amplias. Por consiguiente, es imposible invocar un fundamento jurídico que justifique la privación de libertad. La fuente recuerda también que existe un cuadro general de acusaciones contra activistas en virtud de las disposiciones de la Ley de Prevención de las Actividades Ilícitas, lo cual limita el recurso a la justicia de esas personas.

36. Por último, en la última vista sobre la libertad bajo fianza ante el tribunal superior de lo penal, celebrada el 2 de mayo de 2020, el abogado de la Sra. Zargar retiró la petición, al parecer a causa de la actitud hostil del juez de guardia, con objeto de impedir que un rechazo de la petición tuviera un efecto negativo en un recurso presentado a tribunales superiores. En la orden de rechazo de la libertad bajo fianza no se menciona ningún motivo, salvo el hecho de la retirada de la petición por el abogado.

## ii. Categoría II

37. La actual privación de libertad de la Sra. Zargar es consecuencia del ejercicio de derechos humanos universalmente reconocidos, en particular el derecho a las libertades de opinión, de expresión y de reunión pacífica. Teniendo en cuenta que la Sra. Zargar había manifestado críticas sobre la promulgación de la Ley de Modificación de la Ley de Ciudadanía, por el hecho de tratarse de una defensora de los derechos humanos participante en protestas públicas contra la Ley de Modificación de la Ley de Ciudadanía, y como persona de enlace para el Comité de Coordinación de la Jamia, su actual detención puede interpretarse claramente como otra medida para reprimir su disidencia intimidándola a ella y a otras personas asociadas con el Comité de Coordinación de la Jamia.

38. Las libertades de opinión y de expresión y de reunión pacífica son derechos humanos fundamentales consagrados en los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 19 y 21 del Pacto<sup>6</sup> y el artículo 19 de la Constitución de la India. El Gobierno debe respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a tener y expresar opiniones, incluidas las que no estén en consonancia con su política oficial, así como el derecho a pensar

<sup>6</sup> *Yong-Joo Kang c. la República de Corea* (CCPR/C/78/D/878/1999), párr. 7.2.

y manifestar convicciones personales contrarias a su ideología oficial, con arreglo a las normas imperativas (*ius cogens*) del derecho internacional consuetudinario<sup>7</sup>.

39. El Comité de Derechos Humanos, en su observación general núm. 34 (2011), indicó que las restricciones a la libertad de expresión no debían ser excesivamente amplias y debían ajustarse al principio de proporcionalidad, debían ser adecuadas para desempeñar su función protectora, debían ser el instrumento menos perturbador de los que permitieran conseguir el resultado deseado, y debían guardar proporción con el interés que debía protegerse. Conviene señalar que el Pacto atribuye una gran importancia a la expresión sin inhibiciones en el debate público sobre figuras del ámbito público y político en una sociedad democrática. Además, la aplicación de disposiciones vagas y excesivamente amplias añade peso a la conclusión de que la privación de libertad de la Sra. Zargar se inscribe en la categoría II<sup>8</sup>.

### iii. Categoría V

40. Dado que la privación de libertad de la Sra. Zargar ha sido consecuencia de la vulneración activa de los derechos civiles y políticos, hay una fundada presunción de que la privación de libertad también constituye una vulneración del derecho internacional en razón de una discriminación basada en opiniones políticas o de otra índole<sup>9</sup>. En particular, la Sra. Zargar es víctima de discriminación por razón de su condición de defensora de los derechos humanos y en contravención de su derecho a la igualdad ante la ley y a la igual protección de la ley en virtud del artículo 26 del Pacto. Las opiniones políticas de la Sra. Zargar y sus convicciones con respecto a las políticas y medidas del Gobierno son un factor decisivo en el presente caso.

### *Respuesta del Gobierno*

41. El 22 de julio de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones presentadas por la fuente al Gobierno mediante su procedimiento de comunicación habitual. Solicitó al Gobierno que presentara, a más tardar el 21 de septiembre de 2020, información detallada sobre la situación actual de la Sra. Zargar.

42. El Grupo de Trabajo lamenta no haber recibido respuesta del Gobierno, y que el Gobierno tampoco haya solicitado una prórroga del plazo para dar su respuesta, como se contempla en los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo.

### **Deliberaciones**

43. Ante la falta de respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo ha decidido emitir la presente opinión, basada en toda la información que se le ha presentado, de conformidad con el párrafo 15 de sus métodos de trabajo.

44. En su determinación de si la detención de la Sra. Zargar fue arbitraria, el Grupo de Trabajo se atiene a los principios establecidos en su jurisprudencia acerca de su manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones (A/HRC/19/57, párr. 68). En el presente caso, el Gobierno ha optado por no impugnar las alegaciones, en principio fiables, formuladas por la fuente.

45. Como cuestión preliminar, el Grupo de Trabajo observa que la Sra. Zargar ha sido puesta en libertad bajo fianza. Sin embargo, el Grupo de Trabajo señala que, de conformidad con sus métodos de trabajo (párr. 17 a)), “[n]o obstante la puesta en libertad de la persona en cuestión, [...] se reserva el derecho de emitir una opinión, atendiendo a las circunstancias de cada caso, sobre el carácter arbitrario o no de la privación de libertad”. En el presente caso, el Grupo de Trabajo considera que las alegaciones hechas por la fuente son extraordinariamente graves. Por consiguiente, procede a emitir su opinión.

<sup>7</sup> Opiniones núm. 94/2017, párr. 59; núm. 88/2017, párr. 32; núm. 83/2017, párr. 80; y núm. 76/2017, párr. 62.

<sup>8</sup> Opinión núm. 13/2018, párr. 29.

<sup>9</sup> Opiniones núm. 88/2017, párr. 43; y núm. 13/2018, párr. 34.

i. *Categoría I*

46. Según la fuente, la privación de libertad de la Sra. Zargar carecía de fundamento jurídico. Fue detenida por un presunto delito del cual no se la acusa, y el demandante en el caso es la policía. La información en que se basó la policía para abrir el atestado preliminar de investigación policial provenía al parecer de “informadores secretos”. La Sra. Zargar fue puesta en libertad bajo fianza en relación con el primer atestado preliminar. La fuente afirma que poco después volvió a ser detenida en virtud de otro atestado preliminar abierto en una comisaría de policía diferente. Ello demuestra, según la fuente, mala fe en las intenciones de las autoridades a fin de mantenerla presa mediante un mal uso de la ley por la policía<sup>10</sup>. El Grupo de Trabajo también observa que la Sra. Zargar fue detenida el 10 de abril de 2020 por aproximadamente 13 agentes no uniformados. A juicio del Grupo de Trabajo, la manera desproporcionada en que se detuvo a la Sra. Zargar pone de manifiesto un intento de intimidar a una activista estudiantil.

47. La fuente afirma que, teniendo en cuenta el estado de salud de la Sra. Zargar, no había necesidad de proceder a una detención urgente de la activista estudiantil. Además, se añadieron nuevos delitos a los citados inicialmente después de su detención, al igual que su libertad bajo fianza en relación con el primer atestado preliminar de investigación policial. La fuente también alegó que la principal ley de lucha contra el terrorismo de la India permitía a la policía mantener detenidos indefinidamente a los sospechosos antes de haber sido declarados culpables, aplicando disposiciones vagas y excesivamente amplias. Por consiguiente, era imposible invocar un fundamento jurídico que justificara la privación de libertad; la fuente también recordó que existía un cuadro general de acusaciones contra activistas en virtud de las disposiciones de la Ley de Prevención de las Actividades Ilícitas, lo cual limitaba el recurso a la justicia de esas personas.

48. Incluso si se acepta que la detención de la Sra. Zargar se realizó en estricto cumplimiento de la ley y los procedimientos nacionales, que permiten el método utilizado en su detención y privación de libertad, este hecho no convierte por sí mismo en regular una privación de libertad antes del juicio que es arbitraria por otros motivos. El Grupo de Trabajo recuerda que ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que incluso cuando la detención de una persona se lleva a cabo conforme a la legislación nacional, esa legislación debe ser compatible también con las disposiciones pertinentes del derecho internacional<sup>11</sup>.

49. Por otra parte, de conformidad con el artículo 9, párrafo 3, del Pacto, la reclusión preventiva no debe ser la regla general, sino la excepción, y debe ser lo más breve posible<sup>12</sup>. Dicho de otro modo, en virtud del artículo 9, párrafo 3, del Pacto se reconoce que la libertad es la consideración fundamental y que la privación de libertad no es más que una excepción<sup>13</sup>. La reclusión previa al juicio debe basarse por tanto en una determinación individualizada de que dicha medida resulta razonable y necesaria para fines tales como impedir la fuga, la alteración de las pruebas o la reincidencia en el delito<sup>14</sup>. La información suministrada al Grupo de Trabajo en el presente caso indica que la Sra. Zargar estaba embarazada en el momento de que se trata. Fue detenida el 10 de abril de 2020 pero no compareció ante un tribunal hasta tres días más tarde, el 13 de abril de 2020. El Grupo de Trabajo recuerda que, a juicio del Comité de Derechos Humanos, un plazo de 48 horas es normalmente suficiente para trasladar a la persona y preparar la vista judicial; todo plazo superior a 48 horas deberá obedecer a circunstancias excepcionales y estar justificado por ellas<sup>15</sup>.

<sup>10</sup> El Grupo de Trabajo ha considerado anteriormente que los casos de detenciones sucesivas de personas por la policía eran un abuso procesal manifiesto carente de fundamento jurídico. Véanse las opiniones núm. 59/2020, párr. 68; y 37/2018, párr. 32.

<sup>11</sup> Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 50/2018, núm. 37/2018, núm. 20/2018, núm. 1/2018, núm. 79/2017, núm. 50/2017, núm. 42/2012 y núm. 46/2011.

<sup>12</sup> A/HRC/19/57, párrs. 48 a 58.

<sup>13</sup> *Ibid.*, párr. 54.

<sup>14</sup> Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), párr. 38.

<sup>15</sup> *Ibid.*, párr. 33.



50. Asimismo, la fuente afirma que el confinamiento debido a la COVID-19 ha empeorado la situación de la Sra. Zargar, que ya era difícil, porque las vistas no se celebraron en tribunales sino en el complejo penitenciario, lo cual dificultaba la comparecencia de los abogados. El 30 de abril de 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dictó instrucciones a las autoridades de la prisión de Tihar para que en un plazo de cuatro semanas dieran una respuesta en relación con las condiciones de reclusión de la Sra. Zargar, teniendo en cuenta que estaba embarazada, que se le había denegado atención médica y una dieta especial, que no se le había permitido reunirse ni comunicarse con su familia o con sus abogados y que había permanecido incomunicada desde el 10 de abril de 2020. Por ello el Grupo de Trabajo concluye que se produjo una vulneración del artículo 9, párrafo 4, del Pacto.

51. No hay nada que indique que si no estuviera detenida la Sra. Zargar escaparía a la acción judicial. El Grupo de Trabajo expresó la preocupación de que las exigencias del momento no parecían justificar la privación de libertad de la Sra. Zargar, especialmente después de que inicialmente se le hubiera concedido la libertad bajo fianza.

52. Lo que está claro para el Grupo de Trabajo en el presente caso es que no hubo una consideración personalizada de las circunstancias de la Sra. Zargar ni se tuvieron en cuenta posibles alternativas a la privación de libertad. Su reclusión previa al juicio, que no fue objeto de una revisión para determinar su pertinencia, carecía de fundamento jurídico.

53. En la última vista sobre la libertad bajo fianza celebrada en el tribunal superior de lo penal el 2 de mayo de 2020, el abogado de la Sra. Zargar retiró la petición, al parecer a causa de la actitud hostil del juez de guardia, con objeto de impedir que un rechazo de la petición tuviera un efecto negativo en un recurso presentado a tribunales superiores. La orden de rechazo de la libertad bajo fianza no menciona ningún motivo, salvo el hecho de la retirada de la petición por el abogado.

54. Por último, la fuente alega que los delitos correspondientes a la Ley de Prevención de Daños a los Bienes Públicos, la Ley de Armas y la Ley de Prevención de las Actividades Ilícitas no se agregaron hasta después de su detención, al igual que su libertad bajo fianza en relación con el primer atestado preliminar de investigación policial, después de que el juez de guardia del juzgado metropolitano de primera instancia expresara dudas acerca de las versiones de la policía respecto de los nuevos cargos contra ella. La Ley de Prevención de las Actividades Ilícitas, con arreglo a la cual se formularon los cargos adicionales, permite mantener detenidos indefinidamente a los sospechosos antes de haber sido declarados culpables, aplicando disposiciones vagas y excesivamente amplias. La fuente alega además que existe un cuadro general de acusaciones contra activistas en virtud de las disposiciones de la Ley de Prevención de las Actividades Ilícitas, lo cual limita el recurso a la justicia de esas personas.

55. La acusación de hacer proclamas incendiarias formulada contra la Sra. Zargar puede ser incompatible con la libertad de expresión de la persona, ya que penaliza la expresión y los actos de difusión de información que garantizan la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto. Esto es particularmente cierto si se tiene en cuenta que el Gobierno no ha proporcionado información sobre esta cuestión. El Grupo de Trabajo ha observado anteriormente que el enjuiciamiento basado en leyes vagas y excesivamente amplias es contrario al principio de la legalidad<sup>16</sup>. Este principio requiere que las leyes estén formuladas con precisión suficiente para que la persona pueda acceder a ellas y comprenderlas, de manera que pueda regular su conducta en consecuencia<sup>17</sup>. No es razonable que la Sra. Zargar hubiera previsto que el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión para comunicar ideas mediante sus actividades pacíficas constituiría una conducta delictiva con arreglo a esas disposiciones.

<sup>16</sup> Opiniones núm. 45/2019, párr. 54; núm. 9/2019, párr. 39; núm. 46/2018, párr. 62; núm. 36/2018, párr. 51; núm. 35/2018, párr. 36; núm. 40/2016, párr. 36; núm. 26/2013, párr. 68; núm. 27/2012, párr. 41; y núm. 46/2011, párr. 22.

<sup>17</sup> Opinión núm. 41/2017, párrs. 98 a 101. Véase también la opinión núm. 62/2018, párrs. 57 a 59; y Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), párr. 22.

56. Por otra parte, el Grupo de Trabajo considera que la fuente ha presentado indicios razonables de que las autoridades no mostraron una orden judicial en el momento de la detención de la Sra. Zargar, un hecho que el Gobierno no ha negado. No se daban las circunstancias que ofrecieran un motivo razonable para que la persona fuera detenida en flagrante delito<sup>18</sup>. No basta con que exista una ley que autorice una detención. Las autoridades deben invocar un fundamento jurídico y aplicarlo mediante una orden de detención<sup>19</sup>. En el presente caso, los agentes que practicaron la detención no mostraron una orden en el momento de hacerlo, en contravención de los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 9, párrafo 1, del Pacto. Por los motivos expresados, el Grupo de Trabajo concluye que el Gobierno no estableció un fundamento jurídico para la detención de la Sra. Zargar, por lo que esta es arbitraria y se inscribe en la categoría I.

ii. *Categoría II*

57. La fuente alega que la detención es arbitraria porque la Sra. Zargar fue detenida y privada de libertad por ejercer su derecho a la libertad de expresión en circunstancias que no correspondían a las restricciones permisibles de las libertades fundamentales. Según la fuente, la detención y la privación de la libertad vulneraban el artículo 19 del Pacto y el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

58. El Grupo de Trabajo considera que las acusaciones basadas en las disposiciones de la Ley de Prevención de Daños a los Bienes Públicos, la Ley de Armas y la Ley de Prevención de las Actividades Ilícitas formuladas contra la Sra. Zargar por el ejercicio pacífico del derecho a las libertades de opinión, expresión y reunión pacífica en su condición de defensora de los derechos humanos no pueden considerarse acordes con la Declaración Universal de Derechos Humanos o el Pacto<sup>20</sup>.

59. El Grupo de Trabajo señala que el artículo 19, párrafo 2, del Pacto dispone que “[t]oda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Este derecho abarca el pensamiento político, los comentarios sobre los asuntos públicos, la discusión sobre derechos humanos y el periodismo<sup>21</sup>. Protege el derecho a tener y expresar opiniones, incluidas las que sean críticas con la política gubernamental o no estén en consonancia con ella<sup>22</sup>. El Grupo de Trabajo considera que la conducta de la Sra. Zargar se enmarcaba en el derecho a la libertad de opinión y de expresión protegido en virtud del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 19 del Pacto, y que fue detenida por ejercer esos derechos.

60. Por otra parte, la presunta intervención de la Sra. Zargar, consistente en pronunciar discursos en protestas pacíficas contra la Ley de Modificación de la Ley de Ciudadanía, hacía referencia a asuntos de interés público. El Grupo de Trabajo considera que fue detenida por ejercer su derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, consagrado en el artículo 21, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 25 a) del Pacto<sup>23</sup>.

<sup>18</sup> Opinión núm. 9/2018, párr. 38.

<sup>19</sup> Opiniones núm. 46/2019, párr. 51; núm. 46/2018, párr. 48; núm. 36/2018, párr. 40; y núm. 10/2018, párr. 45.

<sup>20</sup> Opiniones núm. 45/2019; núm. 9/2019; núm. 46/2018; núm. 36/2018; núm. 35/2018; núm. 40/2016; núm. 26/2013; núm. 27/2012; y núm. 46/2011. Véase también A/HRC/41/7, párrs. 38.73 y 38.171.

<sup>21</sup> Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 34 (2011), párr. 11.

<sup>22</sup> Opiniones núm. 8/2019, párr. 55; y núm. 79/2017, párr. 55.

<sup>23</sup> Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 25 (1996), párr. 8 (donde se señala que los ciudadanos pueden participar en la dirección de los asuntos públicos ejerciendo influencia mediante el debate y el diálogo públicos); y opiniones núm. 16/2020, núm. 15/2020, núm. 45/2019, núm. 44/2019, núm. 9/2019, núm. 46/2018, núm. 45/2018, núm. 36/2018, núm. 35/2018, núm. 40/2016, núm. 26/2013, núm. 42/2012 y núm. 46/2011.

61. El Grupo de Trabajo sostiene que el derecho internacional de los derechos humanos obliga al Gobierno a respetar y defender el derecho a tener y expresar opiniones, incluidas las que no están en consonancia con su política oficial. Las restricciones a la libertad de expresión no deben ser excesivamente amplias y deben ajustarse al principio de proporcionalidad, deben ser adecuadas para desempeñar su función protectora, deben ser el instrumento menos perturbador de los que permitan conseguir el resultado deseado, y deben guardar proporción con el interés que deba protegerse<sup>24</sup>.

62. En las circunstancias del caso de la Sra. Zargar no hay nada que indique que sean aplicables las restricciones de derechos permitidas con arreglo a los artículos 19, párrafo 3, y 25 del Pacto. No hay pruebas que surgieran que en las críticas del Gobierno hechas por la Sra. Zargar se llamara directa o indirectamente a la violencia o que pudiera considerarse razonablemente que amenazaban la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas, o los derechos o la reputación de los demás. El Consejo de Derechos Humanos ha instado a los Estados a abstenerse de imponer restricciones en relación con el artículo 19, párrafo 3, del Pacto que no sean compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos<sup>25</sup>. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo remite el presente caso a la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

63. Con arreglo a la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos, así como a señalar a la atención del público la observancia de los derechos humanos<sup>26</sup>. Obviamente, la Sra. Zargar fue detenida por ejercer sus derechos amparados por esa Declaración. El Grupo de Trabajo ha determinado que la privación de libertad de personas debido a sus actividades como defensoras de los derechos humanos vulnera su derecho a la igualdad ante la ley y a igual protección de la ley reconocido en el artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 26 del Pacto<sup>27</sup>.

64. El Grupo de Trabajo concluye que la detención de la Sra. Zargar fue consecuencia de su ejercicio pacífico del derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, y que era contraria al artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y al artículo 26 del Pacto. Por consiguiente, su detención fue arbitraria y se inscribe en la categoría II.

### iii. Categoría V

65. El Grupo de Trabajo considera que la Sra. Zargar fue víctima de discriminación por su condición de defensora de los derechos humanos y en contravención de su derecho a la igualdad ante la ley y a igual protección de la ley en virtud del artículo 26 del Pacto. El Grupo de Trabajo considera que las opiniones políticas de la Sra. Zargar y su posición con respecto a las políticas y medidas del Gobierno son un factor decisivo en el presente caso. Además, en la exposición anterior relativa a la categoría II, el Grupo de Trabajo ha determinado que la detención de la Sra. Zargar fue consecuencia del ejercicio pacífico de los derechos que la asisten en virtud del derecho internacional. Dadas las circunstancias, existen sólidas razones para suponer que la privación de libertad constituye además una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de opinión política o de otra índole<sup>28</sup>.

66. El Grupo de Trabajo considera que la Sra. Zargar fue privada de libertad por razones discriminatorias, a causa de su condición de defensora de los derechos humanos y por sus opiniones políticas o de otro tipo con respecto a la Ley de Modificación de la Ley de Ciudadanía. Su privación de libertad constituyó una vulneración de los artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, párrafo 1, y 26 del Pacto, fue

<sup>24</sup> Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 34 (2011).

<sup>25</sup> Consejo de Derechos Humanos, resolución 12/16, párr. 5 p).

<sup>26</sup> Resolución 53/144 de la Asamblea General, anexo, arts. 1 y 6 c). Véase también la resolución 74/146 de la Asamblea General, párr. 12.

<sup>27</sup> Opiniones núm. 16/2020, núm. 15/2020, núm. 45/2019, núm. 44/2019, núm. 9/2019, núm. 46/2018, núm. 45/2018, núm. 36/2018, núm. 35/2018, núm. 79/2017 y núm. 75/2017.

<sup>28</sup> Opiniones núm. 59/2019, párr. 79; núm. 13/2018, párr. 34; y núm. 88/2017, párr. 43.

arbitraria y se inscribe en la categoría V. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo remite el presente caso a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

### **Decisión**

67. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Safoora Zargar es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20 y 21, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, párrafos 1 y 3, 9, 14, 19, 25 a) y 26 del Pacto, y se inscribe en las categorías I, II y V.

68. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de la India que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de la Sra. Zargar sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

69. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería conceder a la Sra. Zargar el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

70. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de la Sra. Zargar y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

71. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso a la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y la Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, para que tomen las medidas correspondientes.

72. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

### **Procedimiento de seguimiento**

73. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se ha puesto en libertad incondicionalmente a la Sra. Zargar y, de ser así, en qué fecha;
- b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones a la Sra. Zargar;
- c) Si se ha investigado la violación de los derechos de la Sra. Zargar y, de ser así, el resultado de la investigación;
- d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de la India con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

74. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

75. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado<sup>29</sup>.

*[Aprobada el 27 de noviembre de 2020]*

---

---

<sup>29</sup> Consejo de Derechos Humanos, resolución 42/22, párrs. 3 y 7.